

Pobres trabajadores

Contradicciones de las clases populares en la “década disputada”¹

Poor workers

Contradictions of the subalterns classes in the “disputed decade”

Dra. Paula Varela

(CONICET/UBA/IPS) - paula.varela.ips@gmail.com

Resumen:

En 2005, Denis Merklen publicaba *Pobres ciudadanos* como lectura local del proceso de “desafiliación” que aparecía como saldo social (y también político) de 20 años de democracia constitucional en Argentina. El contexto de publicación de su libro era el del comienzo de un crecimiento económico y del empleo extraordinarios que signará los primeros años kirchneristas y sobre el que se erigirá el discurso gubernamental de retorno de la sociedad de la inclusión, como par opuesto de la exclusión neoliberal.

Una década después, nos encontramos frente a una aparente paradoja: la sociedad de los *pobres trabajadores*. Ni excluidos, ni marginales, ni desafiliados; ni el obrero soñado del ascenso social. *Trabajadores pero pobres*.

En este trabajo nos proponemos analizar las contradicciones del proceso de recomposición social y sindical de los trabajadores en la década kirchnerista. Para ello, en la primera parte nos basamos en la observación de algunos datos empíricos relativos a tres pilares que constituyen a los pobres trabajadores: la política salarial; el mantenimiento de la precarización laboral (particularmente el trabajo en negro); y las características de la organización sindical. En la segunda parte, analizamos las tensiones entre estos elementos y la nueva generación de trabajadores surgida en el kirchnerismo, como terreno sobre el que se despliega el crecimiento de la izquierda sindical en los lugares de trabajo.

Palabras Claves: precarización laboral, organización sindical, trabajadores pobres.

Abstract:

In 2005, Denis Merklen published his book “Poor citizens” as a local reading of the process of “disaffiliation” appearing as social (and political) balance of 20 years of constitutional democracy in Argentina. The context of the publication of his book was the start of an extraordinary economic growth and employment that marked the early years of kirchnerism and on which government discourse of return to society of inclusion will be erected, as opposed pair of neoliberal exclusion.

¹. Este texto surge de mi participación en el III Encuentro Internacional de Teoría y Práctica Política “Estado, política y transformaciones en América Latina” de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Allí fuimos convocados distintos investigadores bajo la consigna “2003-2013, la década disputada”.

A decade later, we are faced with an apparent paradox: the society of the poor workers. Not excluded, or marginal, or desaffiliated; nor dreamed worker of social advancement. Workers but poor.

In this paper we analyze the contradictions of the process of social and unión restructuring of the working class in Kirchner decade. Therefore, in the first part we rely on the observation of some empirical evidence on three pillars that constitute the poor workers: wage policy; maintenance of job insecurity (particularly informal work); and characteristics of the unions. In the second part, we analyze the tensions between these elements and the new generation of workers that emerged as the land on which the growth of the trade union left in the workplace unfolds.

Key words: informal work, political unión, poor workers

Fecha de recepción: 01/08/2014

Fecha de aceptación: 30/10/2014

1. Introducción

En 2005, Denis Merklen publicaba *Pobres ciudadanos* (Merklen, 2005) como lectura local del proceso de “desafiliación” que aparecía como saldo social (y también político) de 20 años de democracia constitucional en Argentina. El centro de su reflexión consistía en remarcar, en clave casteliana, el empobrecimiento del carácter de ciudadanos (derechos civiles, políticos y sociales) que implicaba para centenas de miles de pobres urbanos el fin de la sociedad salarial. La contrapartida de esta tesis era, no exenta de utopías nostálgicas, que el trabajo asalariado constituía una suerte de garantía de “ciudadanía no pobre”. Un entramado de derechos, solidaridades, rutinas, instituciones que conformaban la ciudadanía “de primera” perdida post dictadura militar.

Queremos tomar la metáfora de Merklen (que ya hemos criticado en su momento²) para decir que a diez años de kirchnerismo nos encontramos frente a una aparente paradoja: la sociedad de los *pobres trabajadores*. Ni excluidos, ni marginales, ni desafiliados: *trabajadores pero pobres*.

Lo primero que plantea esta afirmación es un cuestionamiento que, a través de la empiria, dispara contra la teoría de la desafiliación que está en el centro del texto de Merklen pero que es el punto de vista más o menos explícito de la mayoría de los análisis sobre los pobres urbanos, la vida en los barrios populares e incluso algunos análisis de los movimientos piqueteros o de desocupados. Es decir, dispara contra la polarización entre dos fantasías con remembranzas funcionalistas: la de la Argentina pre setenta como la “sociedad de la inclusión” y la de la Argentina pos ochenta como la de la “sociedad de la exclusión”. Como señaló Silvia Sigal en el prólogo crítico a la obra de Merklen, la idea de desafiliación es el opuesto complementario de la idea de cohesión social (de allí su fuerte raigambre durkheimniana), no sólo como lectura de la sociedad de posguerra, sino como objeto deseable, como ilusión política. Y es, como también alerta Sigal, la negación (por incompatibilidad o por voluntad expresa) de la otra gran “tradición sociológica”, la que interpreta las crisis sociales (como la de la sociedad de la posguerra) en clave de conflicto, de lucha de clases para decirlo en términos clásicamente marxistas.

La polarización entre la sociedad incluyente y la sociedad excluyente, ha sido la base de distintos pares dicotómicos como *antes* la fábrica *ahora* el barrio; *antes* los trabajadores *ahora* los pobres o los que viven en los márgenes o los excluidos; *antes* la cultura del trabajo *ahora* la desafiliación o la vulnerabilidad o la descolectivización.

² Véase Varela, Paula (2010) “Los límites del territorio. Una hipótesis sobre la tesis de “territorialización de la política”” Massetti, A.; Villanueva, E. y Gómez, M. (comps) (2010). “Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario”. Buenos Aires: Nueva Trilce.

Pues bien, el kirchnerismo abrazó estas polarizaciones binarias y encarnó casi religiosamente la fantasía teórica devenida ilusión política de la cohesión social, proponiendo el retorno a la “sociedad de la inclusión”. Podríamos decir que el kirchnerismo se propuso la no sencilla tarea de salir del “momento marxista” del 2001 (es ese “el infierno”, no el neoliberalismo que en definitiva es una forma determinada de la “inclusión”) donde la ilusión de cohesión social se despedaza entre cortes de ruta, fábricas tomadas, saqueos y manifestaciones urbanas; para intentar un nuevo “momento durkheimniano” posneoliberal. Pero, al hacerlo, mostró que la “inclusión” posneoliberal está más cerca de lo que Owen Jones, en su muy recomendable libro³, describe como los “chavs”, que del “ciudadano de primera” que trasunta el libro de Merklen como nostalgia.

Los “chavs” son esa clase obrera que ya no configura un orgullo de pertenencia porque ya no significa progreso social sino estancamiento y pobreza. Esos trabajadores que Jones encuentra guetificándose en los barrios de viviendas municipales de Londres y que suelen trabajar de cajero de supermercado, de empleados de comidas rápidas, o de limpieza, pero que también son los “pibes” de las tercerizadas que prestan servicios en la industria manufacturera; o las contratadas que rotan por las fábricas de los parques industriales; o los que pueblan las bolsas de trabajo de la construcción. Ese precariado sobre el cual (he ahí quizás la mayor virtud argumentativa del libro de Jones) se construyó un dispositivo de demonización que, basado en las derrotas de las huelgas y protestas de la década del ’80 (con la huelga minera del 85 en Inglaterra como punto de inflexión), los configuró como vagos, sin ambiciones, contrarios a la “cultura del trabajo” (aunque trabajen 12 horas), enemigos de “cultura del mérito” que la clase media se atribuye como justificación de su propio status privilegiado. Lo interesante del planteo de Jones es que escapa a las polarizaciones binarias y reconstruye el proceso de degradación de derechos sociales, económicos y políticos de una clase obrera, otrora orgullo de la Gran Bretaña, ahora sindicada como parásito de la nación.

En diciembre de 2013, la ciudad de Córdoba todavía apagaba algunos núcleos duros de los saqueos habilitados (pero no enteramente explicados) por la extorsión policial. Los medios resaltaban, como prueba irrefutable de la ausencia de necesidad, el tipo de objetos de consumo que eran robados y el hecho de que se movieran en “motitos”, con equipos deportivos de marca, con zapatillas que orillan los 1000 pesos. Pablo Semán (2013) describía, en forma sencilla y contundente, el proceso de segregación urbana que guetificó a los “negrazones” (los chavs cordobeses) y el desprecio clasista (con infaltables referencias racistas) que la clase media de las “Nuevas Córdoba” le profesan. Pero también describía la desconfianza

³*Chavs, la demonización de la clase obrera*. Capitán Swing, Madrid, 2013.

de los progres exenta del racismo políticamente incorrecto, pero pletórica de un clasismo que aparece cada vez más abiertamente legitimado.

Los pibes de las motitos no son los desocupados de los 90 y 2000; tampoco son el “obrero soñado” de la sociedad de la inclusión; son los más pobres de los pobres trabajadores del 2013. No son marginales, excluidos, desafiados de una sociedad post salarial; son los asalariados de la inclusión pos-neoliberal. Son parte de la nueva clase obrera incorporada al mercado de trabajo sobre las condiciones de explotación de la década del noventa. “Nosotros tenemos compañeros de la fábrica que fueron a saquear”, me dijo un delegado fabril de la zona norte del conurbano bonaerense, despejando toda fantasía acerca de la existencia de una barrera infranqueable entre trabajadores y pobres. En las fábricas, que se llenaron de jóvenes de 2003 en adelante, conviven el acceso al mercado (de trabajo, pero también de zapatillas y motitos) con la persistencia de la exclusión noventista que se configuró a través de la precarización. Sobre esa base se configuran los *pobres trabajadores* de la década disputada, y también sus contradicciones.

2. Los tres pilares de los “pobres trabajadores”

Sin querer aburrir con datos, quisiera presentar algunos elementos que sostienen la idea de los “pobres trabajadores”. En primer lugar, una política salarial que podría llamarse: “para muchos, poco”. Como ha sido suficientemente documentado en los estudios del trabajo, las negociaciones colectivas han aumentado exponencialmente en la última década, tanto en número como en cantidad de los trabajadores que involucran⁴. Su eje central ha sido la determinación de los niveles salariales. Esta recuperación de la negociación colectiva fue señalada como una de las muestras más contundentes del llamado “nuevo modelo de relaciones laborales” pos-convertibilidad. Asociado a esta restitución se instaló un argumento aparentemente irrefutable: que mayor negociación colectiva es igual a mayor conquista de derechos laborales. Quisiera relativizar esa afirmación con algunos datos.

⁴ Durante 2005 se firmaron 568 acuerdos, un 63% más que en 2004 (mientras que 2004 había presentado una leve disminución respecto de 2003), y en 2006 fueron avalados 930 convenios y acuerdos, la cifra más alta desde 1991. De allí hasta 2010, las negociaciones colectivas tuvieron un ascenso ininterrumpido, llegando en 2010 a su techo con más de 1500 convenios y acuerdos homologados. De allí en adelante (hasta la actualidad) la curva comenzó a descender en forma constante (de hecho, el Ministerio no publicó más informes anuales). La restitución de la negociación colectiva ha refractado, a su vez, en un aumento sistemático de la cantidad de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos, los cuales pasaron de 3 a 5 millones de asalariados entre 2003 y 2010 en el sector privado no agrícola (el MTESS no contabiliza en su base de datos a los trabajadores del sector público).

En la evolución de las negociaciones colectivas en la década del '90, encontramos lo siguiente: en 1991 el 80% era por rama de actividad y el 20% era por empresa. Hacia 1998 esta relación se invierte: el 20% pasan a ser negociaciones por rama y el 80% por empresa. Esta inversión fue analizada como una de las formas de fragmentación del colectivo de trabajadores en la medida en que deja librado a la relación de fuerzas particular (en cada empresa) el establecimiento de conquistas o derechos. A su vez, la proliferación noventista de las negociaciones por empresa es indisoluble de la ofensiva neoliberal de esmerilar la organización sindical en el lugar de trabajo, es decir, las Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados. En síntesis, la descentralización de la negociación colectiva es la contracara complementaria del debilitamiento de la organización sindical a nivel de empresa. Ahora bien, ¿qué pasa en la actualidad? Según los datos del MTEySS, durante la última década las negociaciones por rama representaron en promedio el 27% de las negociaciones anuales, siendo el resto convenios y actas acuerdo por empresa. Esta evidente continuidad con los '90 presenta, sin embargo, cierta complejidad en la medida en que en Argentina rige el principio de *erga omnes* (lo que se acuerda en un convenio o acuerdo colectivo rige para todos los trabajadores del sector) y que la reforma de 2004 volvió a establecer la primacía del convenio sectorial por sobre el de empresa, y la vigencia de la ultraactividad. Esto significa que las negociaciones por sector rigen para el conjunto de trabajadores (afiliados y no afiliados) de dicho sector. En la interpretación de algunos analistas, esto implicaría que las negociaciones por rama, pese a que son la minoría, tienen sin embargo una cobertura mayoritaria (95% según el MTEySS). Mientras que las negociaciones por empresa son mayoritarias pero engloban a una minoría que establece reglas de juego propias a partir de lo "básico" negociado por rama. Así las cosas, es fundamental analizar el contenido de lo negociado para *poder establecer lo que homogenizan las negociaciones por rama y lo que segmentan las negociaciones por empresa*.

Voy a tomar el ejemplo de los metalúrgicos, rama de importancia en la Argentina, no sólo históricamente, sino en la actualidad por su protagonismo político a través de la alianza de la UOM de Antonio Caló con el gobierno nacional (luego de la ruptura con Hugo Moyano) y por su protagonismo económico en la reactivación de la industria manufacturera en los últimos años (parte de ella asociada a la industria automotriz que disputa con el SMATA). Este ejemplo, no puede extenderse mecánicamente al resto de negociaciones colectivas (cada una de las cuales presenta particularidades) pero sirve para observar la relación entre la negociación salarial, la homogenización-heterogenización del colectivo de trabajadores, y el factor de organización sindical en ese proceso.

Como dijimos, desde la recuperación de la negociación colectiva, el contenido de lo negociado fue eminentemente salarial. En 2013 las cláusulas salariales están presentes en el 90% de las negociaciones, representando un 67% de las cláusulas relevadas (datos del MTEySS). En el gremio metalúrgico, *el ingreso mínimo global de referencia fue fijado en \$ 5.000 desde el mes de julio de 2013*. Sin embargo, esta cifra no indica el salario real de los trabajadores del metal. Para calcular el salario real, al básico hay que agregar otros elementos que son fijados a nivel de empresa. El salario promedio de los trabajadores metalúrgicos según actividad es:

Actividad salario promedio

Metales comunes	\$12.771
Otros productos de metal	\$6.221
Maquinaria y equipo	\$8.557

Fuente: elaboración propia en base a datos de MTEySS
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL. 2013

La primera cuestión que surge es que el salario promedio de “metales comunes” es el doble que el salario promedio de “otros productos de metal”. Según datos del Observatorio Social de la CTA para 2011, la cantidad de trabajadores de “metales comunes” es menos de la mitad que la cantidad de trabajadores de “otros productos de metal”. O sea, un pequeño sector de trabajadores metalúrgicos (19% de los que estaban en 2011 bajo convenio de la UOM) ganan más del doble que un amplio sector de trabajadores metalúrgicos (47%). ¿Con qué se relaciona esta diferencia? La mayor parte de los trabajadores de “metales comunes” son empleados de las grandes empresas de Techint y Acindar, es decir, las de mayor rentabilidad y margen para aumento salarial. En ambas empresas existe organización sindical en el lugar de trabajo. En síntesis, la negociación colectiva de metalúrgicos-rama establece un *básico de convenio bajo* que rige para la mayoría de trabajadores empleados en PyMES (pequeños talleres que muchas veces operan de tercerizadas de las grandes empresas como Organización Techint), en las cuales no hay organización gremial en el lugar de trabajo, por lo que la capacidad de negociar montos por arriba de convenio disminuyen exponencialmente. Mientras que las grandes empresas negocian (a nivel de empresa, fragmentadamente) adicionales salariales que llegan a duplicar el monto del sueldo para una minoría.

Si uno sale del mundo metalúrgico, encuentra el mismo patrón de “básicos bajos”. Considerando las escalas salariales que entraron en vigencia a partir de enero de 2013, el salario básico promedio de la categoría inferior fue de \$ 4.514 y el de la categoría representativa de \$ 5.368. Una segunda conclusión se desprende de esto, el efecto homogeneizador y protector por parte del Estado a través de las negociaciones colectivas se traduce en lo siguiente: *homogeneizar muy por debajo de la canasta familiar* (hoy calculada en \$ 7.600), y dejar librado a la relación de fuerzas particular en cada empresa la negociación de montos salariales que pueden significar hasta la duplicación del sueldo. He aquí una de las fragmentaciones centrales del período post-convertibilidad: una inmensa mayoría de trabajadores registrados que araña un 60% de la canasta familiar y una minoría que la alcanza y supera. Esto explica también la extensión de la jornada laboral en la medida en que el salario se engrosa a través de horas extras, horas nocturnas, horas en fin de semana. La política de Estado en materia de negociación salarial fue centralizar un bajo piso garantizado por el techo salarial pactado con las direcciones sindicales, y descentralizar negociaciones parciales que le permitieran pactos con sectores productivos específicos. En este contexto la perpetuación de un alto porcentaje de negociaciones por empresa, lejos de ser un dato marginal que se anula por el *erga omnes* como se argumenta generalmente desde el Ministerio de Trabajo, pasa a ser un dato central de *una lógica de fragmentación aplicada sobre una homogenización de salarios devaluados*.

Ahora bien, a esta fragmentación al interior de los convencionales (los comprendidos por las negociaciones colectivas) se suma una fragmentación heredada de los '90 y que rige en toda su magnitud: el mantenimiento de un muy alto porcentaje de trabajadores no registrados, que se encuentra hoy alrededor del 35%. Es interesante observar aquí que la tasa de trabajo no registrado en la década del '80 era del 25% y ascendió abruptamente al 40% hacia el final de la década del noventa. Es decir que la década disputada deja como resultado una tasa de trabajo no registrado que se encuentra en niveles cercanos a los alcanzados luego de las contrarreformas neoliberales. Esto afecta directamente a la configuración de los trabajadores pobres en la medida que la política salarial de conjunto es el resultado de la combinación entre la política para los convencionales y la política para no convencionales (a través del Salario Mínimo Vital y Móvil –SMVM- y de las fluctuaciones del precio de la fuerza de trabajo no registrada). El análisis que realiza Clara Marticorena (2013) sobre las diversas operatividades que tuvo el trabajo no registrado en la industria manufacturera de 2003 en adelante, aporta una buena perspectiva para entender esto. Marticorena divide la operatividad del trabajo no registrado en dos momentos. El primero, desde la devaluación hasta 2006. Aquí ya encontramos un dato importante que en general se mantiene oculto: *el pico*

de trabajo no registrado se da dos años después de la devaluación, en 2004, cuando superó el 42%. ¿Por qué? Porque fue la forma en que los empresarios industriales satisfacían la demanda de fuerza de trabajo (por el crecimiento económico, con foco en la construcción y la industria manufacturera) sin exponerse a pagar la doble indemnización establecida bajo el gobierno de Eduardo Duhalde. O sea, en este primer momento el trabajo en negro fue la forma de incorporar trabajadores al empleo en un contexto de incertidumbre (o, dicho en otros términos, transferir a los trabajadores los costos de dicha incertidumbre). De 2005 en adelante (que comienza a observarse la baja del trabajo no registrado) y hasta 2007 (cuando comienzan los primeros síntomas de agotamiento del “modelo kirchnerista” y aparece el factor inflación) el trabajo no registrado adopta otra funcionalidad: ampliación de la brecha salarial de modo de presionar el salario real promedio a la baja. Según los datos que presenta Marticorena, 2006 y 2007 son los años en que más aumenta la brecha de salario real entre registrado y no registrados en la industria manufacturera. A partir de 2008 en adelante, la brecha entre salario registrado y no registrado fue achicándose por el aumento del SMVM cuyo valor supera hoy algunos básicos inferiores de convenio. El proceso de aumento del SMVM pegó un salto entre 2008 y 2009, relacionado al golpe de la crisis internacional que frenó los aumentos de salario real de los convencionales, achicando la brecha entre unos y otros. En 2011 el SMVM pega otro salto. Esto es interesante porque está relacionado con un doble cambio por parte del gobierno nacional respecto de la política salarial. En primer lugar, con el endurecimiento gubernamental hacia la puja distributiva y la conflictividad laboral de los trabajadores convencionales. En este contexto, el incremento del SMVM en los últimos años es una política que apunta a desalentar cualquier proceso de lucha por blanqueo y/o sindicalización por parte de los trabajadores en negro a través de achicar la brecha entre el salario del convencionado y el salario del trabajador no registrado; al tiempo que garantiza la existencia de este “comodín” del precio de la fuerza de trabajo que es el trabajo en negro. Una vez más, para esta política, talla la ayuda de las conducciones sindicales que naturalizan el trabajo no registrado. En segundo lugar, el intento por parte del gobierno de regular el protagonismo de las direcciones sindicales a través de expropiarles, parcialmente, los triunfos de los aumentos de salario de convenio, a través de realizar aumentos “por arriba” del SMVM que son claramente atribuidos a la política estatal y casi directamente a la política presidencial (esto hizo que en muchos casos los básicos inferiores de convenio quedaran casi igualados al SMVM).

Una tercera conclusión aparece: el altísimo porcentaje de trabajo en negro, lejos de ser un efecto residual de los noventa, es una condición necesaria del “nuevo modelo de relaciones laborales” en la medida en que

opera como variable de adaptación de la política salarial post 2003. Al principio de la recuperación económica, transfiriendo el costo de la “incertidumbre” hacia los trabajadores lo que permitió una gran incorporación de fuerza de trabajo al mercado laboral a bajísimo costo salarial y nulo costo en caso de despidos. Hasta 2007, ampliando la brecha salarial entre registrados y no registrados, lo que generó un importante sector de trabajadores por debajo de la recuperación del salario real negociada por convenio (o sea, en términos globales, el mantenimiento de un bajo costo laboral en Argentina). De 2008 en adelante, intentando contener sin mediaciones al sector más precarizado de los asalariados, al tiempo que se endurece el tope a las negociaciones de los convencionales y se intenta quitar poder de fuego de las organizaciones sindicales.

Teniendo en cuenta estos elementos se entiende que a valores de 2013, el 60% de los trabajadores con empleo perciba ingresos inferiores a \$4200; 6 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años trabaja en negro (58.7%), y que el 54.8% de los jóvenes con empleo perciba retribuciones inferiores al salario mínimo (establecido en \$3300). La idea de trabajadores pobres se aleja de la metáfora y se acerca a la descripción estadística.

Si combinamos esta lógica salarial de “para muchos, poco” con algunos datos sobre la organización sindical en la última década, la idea de los pobres trabajadores va tomando mayor cuerpo y comienzan a entenderse también las principales contradicciones que están poniéndose de manifiesto cada vez con mayor fuerza. Generalmente, en los estudios sobre precarización laboral se excluye el análisis de la fortaleza o debilidad de la organización sindical. Esto es un error porque parte de la capacidad de establecer condiciones más o menos precarias de trabajo (y de ingresos) está determinada por esta fortaleza o debilidad.

Como es sabido, una de las características de la clase obrera en Argentina es su alta tasa de sindicalización. En la actualidad esa tasa es de alrededor de 37% de los trabajadores privados registrados en el país. Algunos analistas comparan esta tasa con las de Francia o Brasil para destacar el alto nivel de sindicalización, lo cual es cierto. Sin embargo, si se miran las cifras en términos histórico-comparativos, lo que encontramos es que este 37% está en los mismos niveles de la segunda mitad de la década del ‘90. Según Senén González, Trajtemberg y Medwid (2010), durante los ‘90 se consumó una baja exponencial de la tasa de afiliación como parte de la política de ataque a las condiciones de vida y trabajo de los asalariados. Estiman que en 1990 la tasa de afiliación sindical era de 65,6% (muy similar a la tasa en 1985 que era de 67,5%), mientras que en 1995 la cifra era de 38,7%. Es decir, casi 30 puntos porcentuales menos en solo 5 años. El actual 37% no solo no marcaría una reversión de la política de des-sindicalización de los ‘90, sino que indicaría su continuidad (aunque en términos absolutos la cantidad de asalariados afiliados sea mayor porque aumentó el número

absoluto de trabajadores con empleo). Esta continuidad respecto de los noventa se explica por tres elementos: la continuidad de la tasa de trabajo en negro que describimos recién (que excluye de la posibilidad de sindicalización a esa porción de los trabajadores), el mantenimiento de las formas de contratación precarias como los contratos temporales (que en algunos casos significan estar bajo otro convenio que el trabajador permanente y otras veces implica estar en el mismo convenio, lo que hace también a la reducción del costo laboral empresario), y el avance de la denominada “cuota solidaria” para el sindicato que es una extracción compulsiva del salario a los trabajadores no sindicalizados y cuyo promedio está en alrededor del 2%. La “cuota solidaria” es una forma de financiamiento del sindicato que no requiere de sindicalización y, sobre todo, que no otorga los derechos políticos en materia de organización sindical que la afiliación otorga, léase, elegir autoridades, reclamar al sindicato su presencia en el lugar de trabajo en caso de conflicto capital-trabajo, exigir la conformación de una Comisión Interna o Cuerpo de Delegados. La “cuota solidaria” que se ha extendido de 2003 en adelante incorporándose en convenios en los que antes no existía, es una forma (no la única, por cierto) de financiamiento sindical sin otorgamiento de derechos sindicales. Este es un elemento muy importante para entender las características precisas del nuevo protagonismo de los sindicatos en la década disputada.

En la mayoría de las ocasiones, este aumento de protagonismo ha sido identificado mecánicamente con un aumento de derechos de los trabajadores. Esa operación es falaz. Si uno analiza las formas de fortalecimiento de los sindicatos por parte del gobierno kirchnerista y el contenido de las negociaciones colectivas de trabajo (o sea, los derechos adquiridos), lo que observa más bien es que existe un desfasaje entre los beneficios otorgados a los sindicatos (y sus conducciones) y los derechos otorgados a los trabajadores en su conjunto. En ese desfasaje operan distintos mecanismos como la “cuota solidaria”; el aumento del porcentaje del monto de las negociaciones colectivas que va como “aporte patronal” al sindicato; el recurrentemente discutido fondo de las obras sociales; subsidios directos que el Estado otorga en concepto de “capacitación” para los sindicatos y que permite la ampliación de “servicios” al afiliado; la posibilidad de que el sindicato se transforme en empresa prestadora de servicios en la rama correspondiente (transformándose en empleador de sus propios afiliados). Desde esta perspectiva es muy interesante el estudio de Benes y Fernández Milmanda (2012) sobre el sindicato de Camioneros porque permite comprender parte de las bases materiales (que se combinan con elementos políticos y económico-estructurales) del “reinado” de Hugo Moyano hasta 2011.

Esto resulta de importancia para lo que estamos discutiendo porque el desfasaje entre los beneficios a la organización sindical y los derechos de los trabajadores ha sido uno de los pilares de la reconversión de los sindicatos durante el neoliberalismo, permitiendo que los sindicatos (y sus conducciones) mantengan cierto “poder institucional”, al tiempo que los trabajadores sufrían una profunda pérdida de derechos, es decir, perdían retazos de ciudadanía. La continuidad de este desfasaje hoy explica que hablar de recomposición sindical no es contradictorio con señalar el papel que juegan los sindicatos como garantes de la fragmentación de los trabajadores a través de diversas estrategias que van desde la legitimación de las diversas formas de contratación y tercerización por parte de las empresas (lo que implica, que, en la mayoría de los casos el estatus de “contratado” legitime el hecho de no ser defendidos por la organización sindical, como dijo Hugo Moyano ante los despidos en la industria automotriz en 2009: “No son despidos, se les terminó el contrato”) hasta el abandono del lugar de trabajo como espacio privilegiado en la definición de los niveles de explotación y retribución salarial (que en algunos casos llegó a acuerdos de des-sindicalización de plantas industriales como condición negociada por los sindicatos con las empresas para que éstas se radiquen en Argentina). Si bien no existen series estadísticas constantes respecto de los niveles y características de la organización sindical en el lugar de trabajo que permitan establecer comparaciones a mediano y largo plazo, los datos construidos por el MTEySS permiten delinear algunos rasgos para el análisis. Según la Encuesta de Indicadores Laborales, en 2008 (última medición) solo el 14,2% de las empresas tenía por lo menos un delegado. Si desgranamos esa cifra según la envergadura de la empresa vemos un degradé en el que va menguando la existencia de delegados sindicales según el tamaño de la empresa. En las grandes empresas (de 200 trabajadores o más), el 63,3% tiene algún delegado; en las “medianas” (de 50 a 200 trabajadores), solo el 31% tiene algún delegado; mientras que las chicas (entre 10 y 49 trabajadores) el 8,5% tiene algún delegado. En definitiva, este desfasaje permite entender también la configuración del lugar de trabajo como “*locus* de la contradicción”. La combinación entre aumento exponencial del empleo, retórica inicial de la “cultura del trabajo” e incluso cierta legitimación de los “conflictos del crecimiento”, fortalecimiento de los sindicatos por arriba y mantenimiento de condiciones de explotación noventistas por abajo, sumado a cierto abandono de los establecimientos como espacio de organización sindical, terminaron configurando al lugar de trabajo como un espacio de condensación de las contradicciones y, en ese marco, terreno de uno de los fenómenos más interesantes de la recomposición sindical: el crecimiento de la izquierda a nivel de comisiones internas opositoras a las conducciones a nivel de rama.

3. Asincronía

Para entender el sindicalismo de base como expresión de las contradicciones que intentamos describir someramente recién, hay que tener en cuenta una asincronía: la que se da, por un lado, entre el crecimiento económico y del empleo (lo que llamamos recomposición social de la clase trabajadora en Argentina), el fuerte discurso de polarización con la década del 90 por parte del gobierno, la legitimación gubernamental que hasta 2006 tiene la conflictividad laboral como manifestación del derecho a la “dignidad del trabajo”; y por otro lado, la efectiva recuperación de derechos perdidos, de instituciones que garanticen esa dignidad.

Cuando en 2007 entrevistamos a obreros de FATE (Varela, 2008) (en pleno proceso de organización antiburocrático) escuché por primera vez la frase: “si me echan no me importa, están tomando gente en todos lados”. Para mí, que venía de hacer trabajo de campo en 2002 en barrios azotados por la desocupación en Lanús y la Matanza, esa frase resultaba casi incomprensible. El que la decía, tenía alrededor de 25 años y presentaba el dato concreto de una automotriz de primera línea que había publicado el aviso de incorporación de al menos 150 operarios. Todos sus amigos del barrio (que no era un asentamiento ni una villa, pero era un barrio popular del conurbano norte, con calles de tierra, casas de material con complementos de chapa y con al menos dos núcleos familiares en los lotes –padres e hijos con sus familias-) estaban “pegando” trabajo en fábricas. Así de contundente era impacto subjetivo de la recomposición del empleo (así de contundente, por oposición, el impacto disciplinante del desempleo masivo que hoy algunos gerentes de recursos humanos añoran). Este mismo joven fue parte, luego de la entrevista, del proceso que, entre muchos otros elementos, tuvo como nota de color el principio de paliza que le dieron los trabajadores a Pedro Wasejko, Secretario General del sindicato del neumático, cuando éste se negaba a atender los reclamos de la base de la fábrica de San Fernando.

Parafraseando a Murmis y Portantiero en su análisis sobre los orígenes del peronismo, hoy podemos decir que el kirchnerismo ha dado una nueva generación de trabajadores que se forja en una cierta asincronía entre acumulación y participación. *La expansión e intensidad del crecimiento económico con base en fuertes incorporaciones al mercado de trabajo y consumo produjo una rápida recomposición social y aumento de las expectativas que se topó con la continuidad de una ciudadanía devastada en el terreno de los derechos laborales y ampliada en el terreno del consumo.* Una ciudadanía mucho más cercana a los derechos amputados en el neoliberalismo (a través de la precarización laboral), que a los tan mentados derechos ciudadanos conquistados por los trabajadores durante el primer peronismo. Podría decirse, como metáfora, que el kirchnerismo operó el

pasaje del peronismo de los derechos laborales al peronismo de los derechos del consumidor⁵. Y en ese pasaje hay una institución que quedó en falsa escuadra: la burocracia sindical. A diferencia del '45, las dirigencias sindicales aparecen más como parte fundante que como suturadores de esa asincronía. Esa tensión encuentra su terreno de expresión en el establecimiento laboral, el lugar en que esa asincronía se hizo más evidente fue la fábrica. ¿Por qué allí? Porque es donde la continuidad de las condiciones de explotación de los '90 se hace más vívida, y también porque el movimiento obrero en Argentina tiene allí un *locus* de organización histórico. La fortaleza de las comisiones internas y cuerpos de delegados han marcado y diferenciado la historia de nuestro movimiento obrero desde mitad del siglo XX hasta hoy.

Fue allí, en “la fábrica”, donde se expresó, desde el inicio mismo de la década, la contradicción entre las expectativas despertadas por el crecimiento económico y el discurso pos-neoliberal, y su realización. Fue allí, en “la fábrica” donde se anticipó, en grageas de algunas luchas larvadas (y otras no tanto), la sombra de la des-ilusión. Eso gestó un proceso continuo (aunque desigual) de militancia obrera que presenta distintos momentos, pero una constante: cada vez mayor participación juvenil. Sin hacer una periodización del proceso, quiero señalar algunos hitos que resultan significativos. El 2009 mostró este fenómeno por cadena nacional con el conflicto de Kraft. Los rostros de obreros y obreras poblaron la Panamericana pero también la televisión. La envergadura del episodio produjo un hecho inédito: la televisación en vivo y en directo de las elecciones de una comisión interna de fábrica, y el triunfo de la lista de izquierda clasista que agrupaba a la mayoría de los activistas del conflicto⁶. De allí en adelante, el proceso sufrió una baja en la conflictividad (y por ende en la visibilidad) pero no en la extensión. De hecho las elecciones de distintos gremios muestran datos relevantes del avance de este sindicalismo de base. Este es el caso de la Federación Gráfica Bonaerense en abril de 2012, en la que la Lista Naranja-Bordó obtuvo un 29% de los votos, llegando al 40% en la Zona Norte del GBA; las elecciones del gremio de la

⁵ Es interesante el proyecto de ley que Cristina Fernández presentó en el Congreso de la Nación sobre los “derechos del consumidor” en 2014. En el video de presentación se observa, justamente, la comparación entre el primer peronismo como aquel que dio derechos a los trabajadores y el kirchnerismo, partiendo de una suerte de acceso al consumo “garantizado”, se ofrece entonces como aquel que elabora el plafón legal para hacer efectivo ese derecho al consumo. Los ejemplos de esta ciudadanía de consumo son los celulares, las motos, los plasmas, todo eso que vuelve a los “chavs” tan intolerables para las clases medias (en algún sentido, porque implican el “tupé” que pretender compartir algunos objetos de consumo).

⁶ En las elecciones de 2009 ganó la Lista 1 encabezada por Hermosilla del PTS, frente a la Lista 2, encabezada por Bogado del PCR. Véase Varela, P. y Lotito, D. (2009) “La lucha de Kraft-Terrabusi. Comisiones internas, izquierda clasista y ‘vacancia’ de representación sindical” en *Revista Conflicto Social*, Instituto Gino Germani, UBA, Buenos Aires.

Alimentación en el que la Lista Bordó obtuvo un 36% de los votos, logrando la mayoría en 14 fábricas; las elecciones en el gremio jabonero y la lista Bordó obtuvo un 37% en las urnas de Capital y GBA; y en octubre las elecciones del sindicato aeronáutico (APA), en las que la opositora Lista 2 “Desde las Bases” obtuvo el 30% de los votos en aeroparque Jorge Newbery. El paro del 20 de noviembre de 2012 volvió a hacer público el sindicalismo de base y su crecimiento. La cobertura mediática comenzó con escenas de cortes de Panamericana y piquetes en el subte, ambos dirigidos por sectores opositores a las direcciones de sus respectivos sindicatos y también a las conducciones convocantes de la CGT y la CTA. Decenas de comisiones internas y cuerpos de delegados de gremios no convocantes adhirieron a la medida por fuera de sus direcciones, transformando en declaración política la adhesión masiva que se expresó a través de un pronunciado ausentismo en los lugares de trabajo.

El crecimiento de este fenómeno ha generado cambios de estrategias en las direcciones sindicales que podríamos diferenciar en tres grupos. El primero, se ve en el caso de la Alimentación que tiene internas combativas en Kraft, Pepsico y sectores combativos que no dirigen la interna pero tienen presencia, en Stani-Cadbury. Allí, de 2010 en adelante (post conflicto de Kraft) la dirección de Daer optó por negociar aumentos salariales por arriba de la media con la expectativa que eso debilitara las conducciones fabriles opositoras. El segundo, encabezado por el sindicato de Comercio que, a partir de algunos casos de intentos de conformación de comisiones internas en cadenas de supermercados (con todas las dificultades de organización sindical en esos sectores) comenzó una política de organización sindical de los establecimientos dirigida desde el sindicato como intento de obturar la formación de listas opositoras. El tercero, con el SMATA como expresión más despojada, es la abierta persecución e intento de desafuero (con altas dosis de violencia a través de patotas sindicales) de las internas opositoras como es el caso de la autopartista Lear.

En 2012, el comienzo de las internas en el PJ, la ruptura de Hugo Moyano con el gobierno nacional en este contexto y la configuración del insólito escenario de 5 centrales sindicales en el país, introduce nuevos elementos en el campo sindical. El fraccionamiento al interior de las direcciones sindicales peronista ha permitido un aceleramiento del ritmo de extensión del sindicalismo de base, aunque su visibilidad esté nublada por la baja conflictividad laboral en el sector privado (acompañado por un aumento de la conflictividad laboral en el sector público desde 2011 en adelante). Un caso paradigmático de la relación entre divisiones entre las direcciones sindicales y expansión del sindicalismo de base es el conflicto reciente en la autopartista Lear (la más grande de la Zona Norte), en que se combinó un proceso de avance del sindicalismo de base que ganó la Comisión Interna en 2012, con la división de la dirección sindical del SMATA entre un ala

moyanista y el ala kirchnerista de Pignanelli. En esa coyuntura, y por aciertos de la propia CI, lo que intentó ser un ataque de la empresa y el SMATA a la organización de base en la fábrica, a través del despido de 14 trabajadores activistas, devino un conflicto que se masificó en la planta, y un fortalecimiento de la interna y su militancia de base. Esta dinámica se repite, con características particulares, en otros casos como la elección de CI en la planta de Coca Cola de Pompeya en mayo de este año, o el ataque a la CI de la VW de Córdoba, histórico bastión de Omar Dragún.

En la extensión de este proceso se despliegan dos características específicas: el especial protagonismo de los sectores juveniles en blanco pero precarizados y la participación cada vez más notoria de la “izquierda radical”. Esto permite introducir algunas preguntas que se vuelven importantes a la hora de intentar cualificar cuál es la profundidad de este fenómeno en el movimiento obrero en Argentina. ¿Hay una nueva generación obrera en estos jóvenes? ¿Qué tienen estos jóvenes de la “patria metalúrgica” y qué del “heavy metal”, por usar las metáforas que usó Maristella Svampa? ¿Qué papel juega la extrema izquierda en este proceso?

La pregunta por las generaciones, excediendo la cuestión biográfica, apunta al análisis de los momentos en que grandes acontecimientos históricos producen rupturas con los sistemas de sentido previos y exponen, entonces, a una determinada juventud a la construcción de nuevos marcos de interpretación y nuevos itinerarios de acción. Lo que comparte una generación no es solo la misma cantidad de tiempo, sino sobre todo la misma “calidad de tiempo” que le otorga un cambio de época y que modifica el horizonte de su práctica. Desde este punto de vista, la pregunta por en qué medida y a partir de qué “acontecimientos vitales” (diría Manheim) la inyección de cientos de miles de jóvenes obreros constituye o no una nueva generación, nos envía en forma directa al 2001. Los jóvenes que hoy conforman el “sindicalismo de base” son los que en 2001 transcurrían su adolescencia o el ingreso a la juventud. Esto es importante porque permite comprender una dimensión ideológico-política central del sindicalismo de base actual, que lo diferencia de otros períodos de la historia del movimiento obrero en Argentina. En primer lugar, no cargan, en su experiencia inmediata, con las derrotas de la década del 90, particularmente la derrota que significó la hiperinflación del ‘89 y las contrarreformas neoliberales posteriores, cuya consecuencia más sentida fue la desocupación masiva. Y no cargan tampoco con el disciplinamiento que esas derrotas significaron. Esta ausencia de “memoria de las derrotas” (que tiene como contraparte, falta de experiencia en organización y luchas) se combina con la ausencia de una identificación política definida. A diferencia de lo que sucedió desde el ‘45 en adelante en Argentina en que la identificación política e ideológica mayoritaria de la clase obrera fue el peronismo, esta nueva generación no expresa esta adhesión ni sentimentalmente, ni político-ideológicamente. Esto

no significa que no hagan sus elecciones políticas a la hora de votar y que lo hayan hecho mayoritariamente por el kirchnerismo. Significa más bien la diferencia entre *ser* peronista y *votar* por el kirchnerismo. Cuando, entre 2003 y 2007, en el marco de la UBA y la UNLP realizamos más de 1.000 encuestas en distintas estructuras de trabajadores⁷, ante la pregunta de “¿cómo se definiría usted políticamente?”, la mayoría de los trabajadores respondía “de ningún modo” o “no soy nada”. El cruce de respuestas entre el sector industrial y el de servicios, entre los gremios pertenecientes a la CGT y los de la CTA, no variaba la tendencia sino que la confirmaba. Más del 50% de los encuestados, se declaraba “apolítico”. Estábamos ante una población sin identificaciones políticas claras que en nuestro país significa mucho más que eso, significa una población obrera no peronista (¿pos-peronista?). He aquí la segunda clave para preguntarse por la gestación de una nueva generación obrera.

Sin embargo, esta generación tuvo un cierto “bautismo político” que le aportará un sello generacional: la crisis de 2001. Esta es quizás, la marca más determinante de estos “jóvenes que se vuelven militantes de sus derechos”. La crisis de 2001 es “acontecimiento vital” en un *doble sentido*: es crisis del Estado en su conjunto, descrédito de todas sus instituciones, ruptura de cualquier promesa de cohesión social; pero es también legitimación de la acción directa, la protesta, la lucha, el asambleísmo. Una legitimación de la que la “extrema izquierda” o la “izquierda clasista” forma parte por su presencia en los fenómenos de la lucha y organización popular, como el movimiento piquetero y las fábricas tomadas. Esa inscripción de la izquierda clasista como sector, minoritario pero existente, del clima de época de las luchas sociales y políticas que dieron paso al kirchnerismo, es importante para entender su lugar en el sindicalismo de base actual.

El último elemento, derivado en realidad del 2001, es el que hace a las características del kirchnerismo como proyecto de reconstrucción del Estado post-crisis. La repolitización kirchnerista (que ha sido estudiada, por ejemplo, en relación a La Cámpora) se asienta en la promesa kirchnerista de la reconstrucción de un Estado que, en oposición al “excluyente” neoliberal de sus padres y de su niñez, incluya a estos jóvenes como algo más que “pobres ciudadanos”. La reivindicación de la cultura del trabajo, de la dignidad, de la lucha por los derechos (de la que hablábamos antes) es parte de esa promesa que luego derivó en “el nunca menos” como slogan de juventud kirchnerista. Pero a diferencia de lo que pasó en los barrios (donde el kirchnerismo logró englobar movimientos sociales previos y crear algunos nuevos) o lo que sucedió en las facultades (donde avanzó con agrupaciones propias que ganaron cierto peso estudiantil), en el movimiento obrero el

⁷ Programa de Investigación “Los trabajadores en la Argentina Actual - Encuesta Obrera” desarrollado con docentes e investigadores de la UBA y la UNLP, e impulsado por el Instituto de Pensamiento Socialista “Karl Marx”.

kirchnerismo no tuvo una política organizacional propia sino que se basó en la alianza con las viejas direcciones sindicales. No hay Cámpora en el movimiento obrero, y la Juventud Sindical de Facundo Moyano (que en algún momento pareció expresar la renovación kirchnerista de los sindicatos heredados de los noventa) no logró ganar ese lugar de renovación, ni logró mantenerse dentro del kirchnerismo. Eso amplió también el margen de crecimiento de la izquierda.

A 10 años de 2003, la ilusión política del retorno a la sociedad de la inclusión va desdibujándose a medida que se agotan las variables del “modelo”. Y tras ese agotamiento afloran las tensiones entre la política de “pobres trabajadores” y la nueva generación que los encarna. Hace poco, un gerente de recursos humanos, definía (con la concreción que da la cercanía al conflicto de clase) las características de los “nuevos jóvenes” que trabajaban en su planta industrial como aquellos que no “tienen la cultura del trabajo de sus abuelos” ni “el disciplinamiento del desempleo de sus padres”. “Imprevisibles”, dijo, con cierto pesar.

4. Postdata

Cuando expusimos esta ponencia estaba cerrando el 2013 y todavía no se habían configurado con claridad los “conflictos de la crisis” que están tiñendo el 2014. La huelga docente de marzo (con 17 días de paro en provincia de Buenos Aires), el paro general de abril con mayor adhesión que su antecesor en noviembre de 2012, y los actuales conflictos por despidos y suspensiones en la industria automotriz, indican un cambio en la dinámica de la conflictividad laboral. Tampoco se había configurado con tanta claridad, el discurso de abierta demonización de las luchas obreras que ha adoptado el gobierno kirchnerista, ni la política de represión a los conflictos que toman medidas de acción directa como los cortes de Panamericana. Estos hechos aceleran (y vuelven más revulsivos) las tensiones que intentamos delinear en la exposición, como puede observarse en el caso de actual lucha en Lear.

Bibliografía

- Fernández Milmanda y Benes (2012): “When your friend asks you for moderation. New challenges for the argentine unions: The case of the teamsters’ federation”, ponencia presentada en 2do. ISA Foro, Justicia Social y Democratización, Buenos Aires.
- Jone, Owen (2013): *Chavs, la demonización de la clase obrera*. Madrid. Capitán Swing.
- Marticorena, C. (2013): “Relaciones laborales y condiciones de trabajo en la industria manufacturera durante la postconvertibilidad en Argentina”, en Juan

- Grigera (Compilador) *La posconvertibilidad a debate*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Imago Mundi.
- Merklen, Denis (2005): *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 1983-2003* Buenos Aires, Argentina. Editorial Gorla.
- Semán, Pablo (2013): *Córdoba y los abismos de la desigualdad* <http://pabloseman.wordpress.com/2013/12/04/cordoba-y-los-abismos-de-la-desigualdad/>
- Senén González, Cecilia; Trajtemberg, David y Medwid, Bárbara (2010): “Tendencias actuales de la afiliación sindical en Argentina: evidencias de una encuesta a empresas”, *Relations Industrielles* 1, Vol. 65.
- Varela, Paula (2010): “Los límites del territorio. Una hipótesis sobre la tesis de “territorialización de la política”” en Massetti, A.; Villanueva, E. y Gómez, M. (compiladores) "*Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario*". Buenos Aires, Argentina. Nueva Trilce.
- Varela, P. y Lotito, D. (2009): “La lucha de Kraft-Terrabusi. Comisiones internas, izquierda clasista y ‘vacancia’ de representación sindical”, *Revista Conflicto Social* Buenos Aires, Argentina. Instituto Gino Germani, UBA.